

Government at a Glance: Latin America and the Caribbean 2024



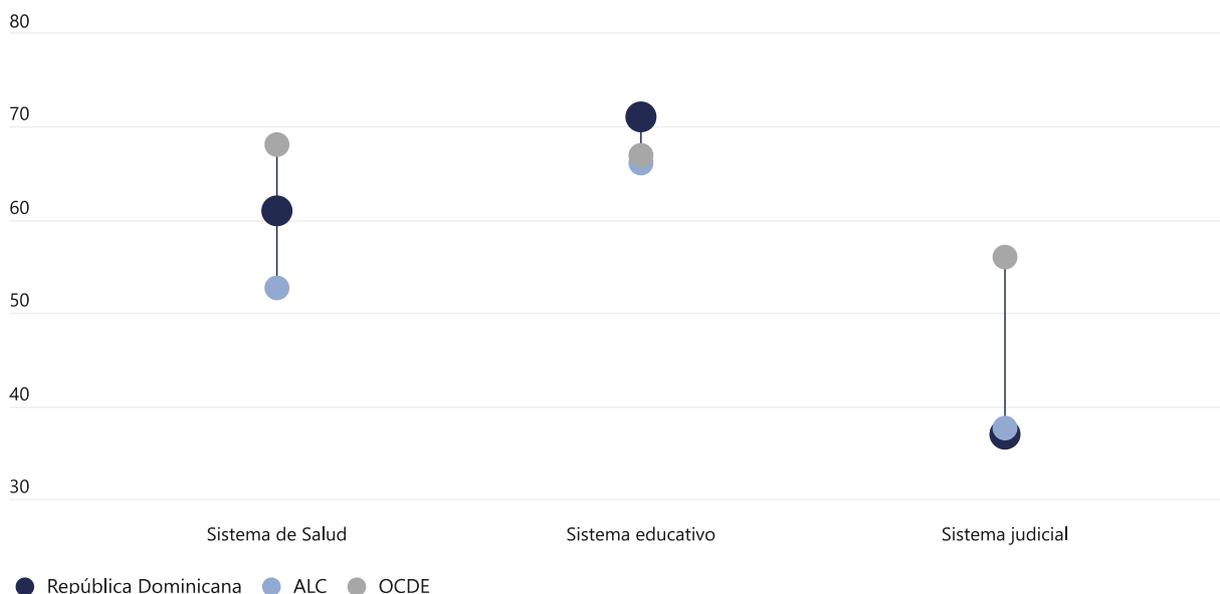
República Dominicana

Confianza y satisfacción con los servicios públicos

La confianza en las instituciones públicas y la satisfacción con los servicios públicos son resultados importantes de la calidad de la gobernanza pública. Reflejan la percepción que tienen los ciudadanos de la competencia del gobierno en el diseño de políticas públicas y la prestación de servicios, así como sus expectativas sobre el comportamiento de las instituciones y los funcionarios públicos. La satisfacción con los servicios públicos y la confianza en las instituciones públicas, aunque no son resultados necesarios de la gobernanza democrática, pueden mejorar la eficacia de la gobernanza fomentando la participación en la vida pública, el cumplimiento de las políticas públicas y la cohesión social.

La satisfacción con los sistemas educativo y de salud en la República Dominicana está por encima del promedio de ALC, y la satisfacción con el sistema judicial está en línea con el promedio de ALC. Los dominicanos están más satisfechos con el sistema educativo, con un 71% de la población satisfecha, por encima del promedio de ALC (66%) y de la OCDE (67%). El sistema de salud tiene una tasa de satisfacción del 61%, que supera la media de ALC en 8 puntos porcentuales (p.p.) pero está por debajo de la media de la OCDE del 68%. La satisfacción con el sistema judicial es del 37%, en línea con la media de ALC.

Gráfico 1. Satisfacción con los servicios públicos, 2022



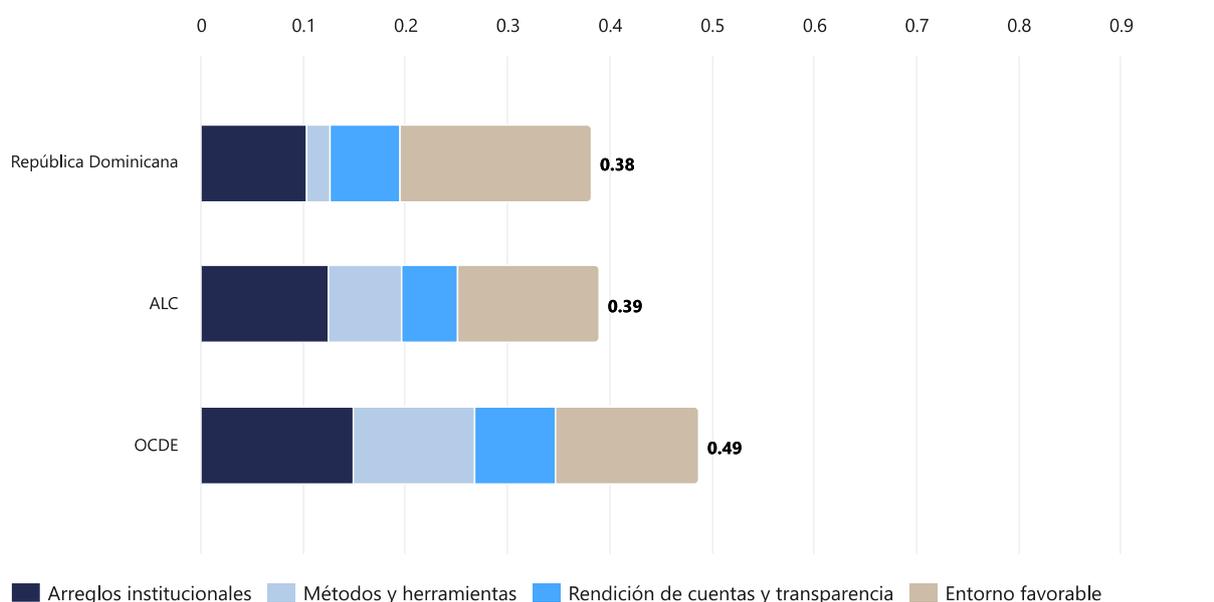
Buena gobernanza para la inclusión y la sostenibilidad

En una época de crisis múltiples, los países de América Latina y el Caribe necesitan adoptar prácticas de buena gobernanza que fomenten la inclusión y la sostenibilidad, elementos cruciales para promover la prosperidad y la resiliencia democrática. Entre las acciones clave están construir sobre las fortalezas de la democracia, incluyendo mejorar la participación de las partes interesadas en la toma de decisiones, así como fomentar la representación y la inclusión en la fuerza laboral pública. Además, los esfuerzos deben centrarse en reforzar las competencias clave para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible, incluidos los enfoques presupuestarios y de contratación pública que apoyen la transición verde. Asimismo, la protección contra las amenazas a los valores democráticos exige que se mantengan normas eficaces de integridad pública y regulaciones sólidas contra las influencias indebidas.

Las prácticas de gestión presupuestaria, como la presupuestación verde, pueden ayudar a hacer frente a la crisis climática y a alcanzar objetivos medioambientales. Los mecanismos de presupuestación verde incluyen marcos institucionales para evaluar los impactos ambientales de las políticas presupuestarias y fiscales, métodos para evaluar su coherencia, mecanismos para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, y un entorno favorable para la presupuestación verde. Sólo unos pocos países de ALC han adoptado mecanismos de presupuestación verde y su aplicación podría ser más efectiva.

La República Dominicana, uno de los pocos países con mecanismos de presupuestación verde, obtiene resultados cercanos a la media de ALC, con una puntuación de 0.38, en una escala de 0 a 1, frente a 0.39 (ALC) y 0.49 (OCDE). La dimensión más fuerte de la República Dominicana es el entorno favorable, con una puntuación de 0.19 sobre un máximo de 0.25. Hay margen de mejora en las demás dimensiones del índice, especialmente en métodos y herramientas, donde obtiene una puntuación de 0.02.

Gráfico 2. Índice sobre Presupuestación Verde de la OCDE, 2022



La contratación pública -la compra de bienes, servicios y obras por parte de los gobiernos y las empresas estatales- representó un promedio del 17.4% del gasto público total en los países de América Latina y el Caribe en 2021. Las administraciones públicas están adoptando cada vez más la contratación pública como instrumento de política estratégica para promover objetivos sociales, por ejemplo, para fortalecer la sostenibilidad y la responsabilidad medioambiental, favoreciendo la contratación verde y la conducta

empresarial responsable, y para fortalecer la inclusión, incentivando la participación de diferentes grupos de personas y empresas como proveedores.

La República Dominicana ha desarrollado una estrategia a nivel central de gobierno para promover la participación de las PYME en los procesos de contratación pública. El país no cuenta con estrategias para promover la contratación pública verde o la conducta empresarial responsable. En comparación, 14 países de ALC cuentan con una estrategia del gobierno central para promover la participación de las PYMES en la contratación pública, 9 países para la contratación pública verde y 7 para la conducta empresarial responsable.

Gráfico 3. Contratación pública estratégica a nivel central para perseguir la sostenibilidad y la inclusión, 2022

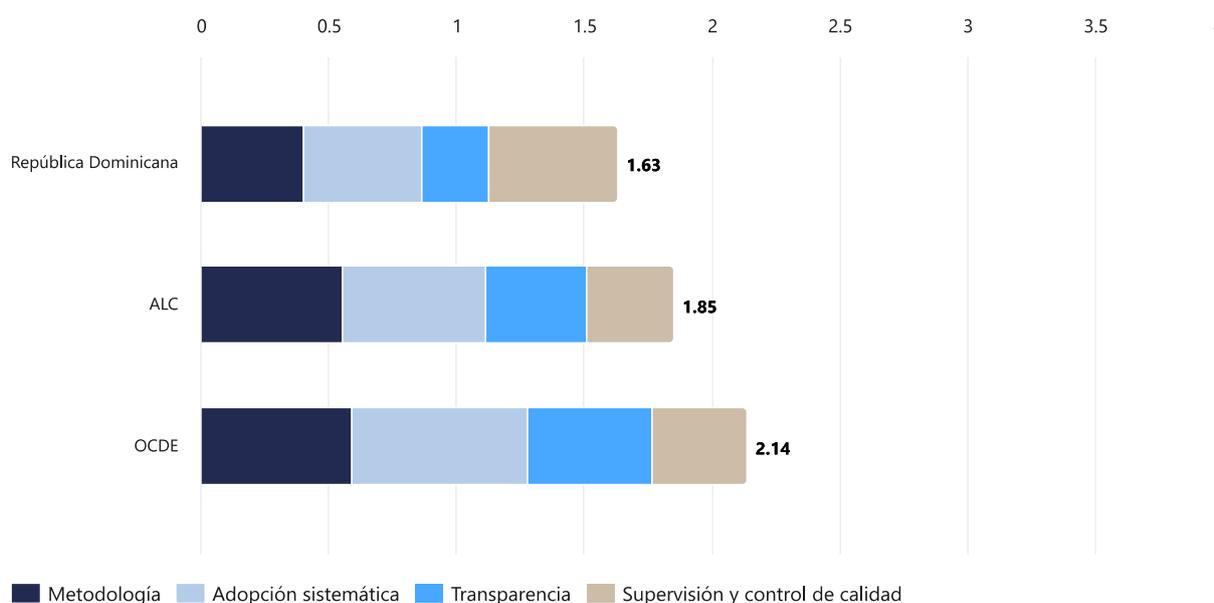
	Compras verdes	PYME	Prácticas empresariales responsables
Se ha desarrollado una estrategia/política a nivel central	Países de ALC: 9 Sí / 10 No	Países de ALC: 14 Sí / 5 No	Países de ALC: 7 Sí / 12 No
Algunas entidades de contratación han desarrollado una estrategia/política interna	Países de ALC: 6 Sí / 13 No	Países de ALC: 1 Sí / 18 No	Países de ALC: 3 Sí / 16 No
No hay estrategia o política	Países de ALC: 6 Sí / 13 No	Países de ALC: 7 Sí / 12 No	Países de ALC: 3 Sí / 16 No

Una participación significativa de las partes interesadas en la toma de decisiones contribuye a mejorar el diseño y la aceptación pública de las políticas y los servicios públicos. El Índice de Gobernanza y Política Regulatoria (IREG) de la OCDE evalúa la participación de las partes interesadas en la elaboración de regulaciones subordinadas (las aprobadas por el jefe de gobierno, los ministerios o el gabinete). Este indicador mide el desempeño de los países en involucrar sistemáticamente a las partes interesadas en la toma de decisiones públicas, el uso de herramientas, la transparencia de sus consultas y su supervisión y control de calidad. Entre 2019 y 2022, 8 de los 11 países de ALC encuestados (73%) mejoraron su puntuación iREG en participación de las partes interesadas.

The Dominican Republic performs below the LAC average on the iREG index for stakeholder engagement for developing subordinate regulations. With an overall score of 1.63, on a 0-4 scale, the Dominican Republic is below the LAC (1.85) and the OECD (2.14) averages. The Dominican Republic achieves its highest scores for oversight and quality control (0.5 out of a maximum score of 1) and systematic adoption (0.47). There is room for improvement in all dimensions, particularly on stakeholder participation transparency (0.26) and methodology (0.4).

La República Dominicana se sitúa por debajo de la media de ALC en el índice iREG de participación de las partes interesadas en la elaboración de regulaciones subordinadas. Con una puntuación total de 1.63, en una escala de 0 a 4, la República Dominicana se sitúa por debajo del promedio de ALC (1.85) y de la OCDE (2.14). La República Dominicana alcanza sus puntuaciones más altas en supervisión y control de calidad (0.5 sobre una puntuación máxima de 1) y adopción sistemática (0.47). Hay margen de mejora en todas las dimensiones, especialmente en transparencia de la participación de las partes interesadas (0.26) y metodología (0.4).

Gráfico 4. iREG sobre la participación de las partes interesadas en la elaboración de regulaciones subordinadas, 2022



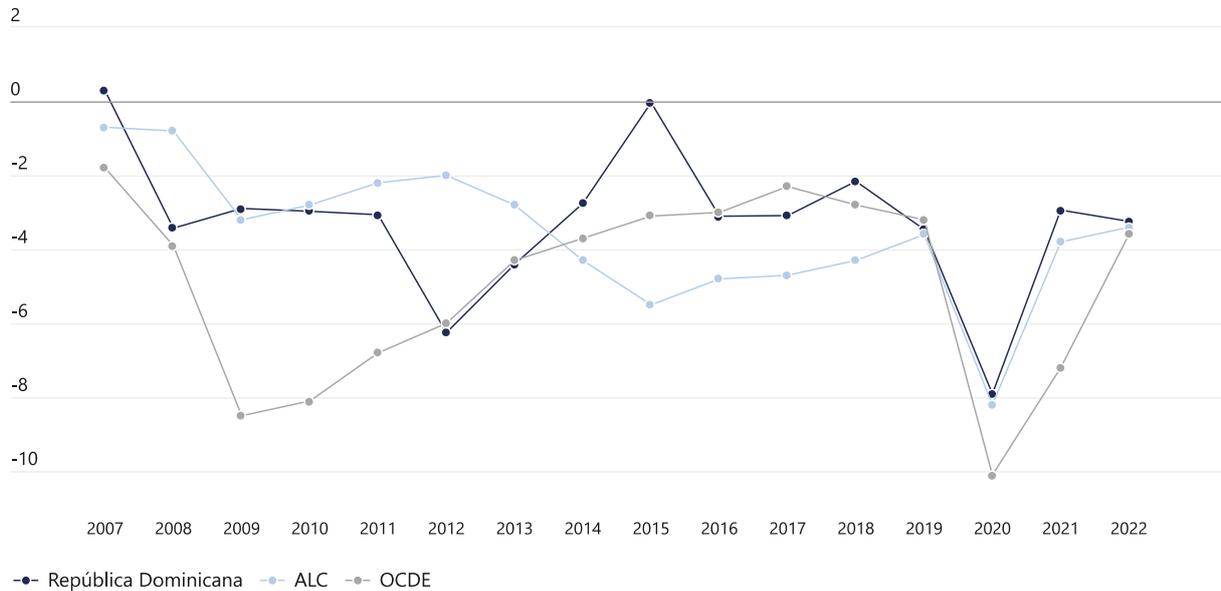
Uso y gestión de los recursos públicos

Para lograr avances significativos hacia un crecimiento inclusivo y sostenible, los gobiernos deben gestionar sus recursos existentes de forma estratégica. Desde una perspectiva fiscal, esto implica equilibrar cuánto gasta y cuánto recauda el gobierno. Desde la perspectiva de los recursos humanos, significa reforzar la capacidad y las competencias de los empleados públicos y crear una fuerza laboral pública y oficiales públicos electos que representen a todas las personas a las que sirven.

Las finanzas públicas de la región de ALC muestran modestos signos positivos, tras un marcado deterioro en 2020. Este deterioro se debió a las medidas de emergencia adoptadas para luchar contra la pandemia de COVID-19, y a las medidas de apoyo a las empresas y a las personas para gestionar su impacto. Para el 2022, los balances fiscales -la diferencia entre los ingresos y los gastos de un gobierno en un año- ya se habían recuperado ampliamente a los niveles anteriores a la COVID en toda América Latina y el Caribe. Sin embargo, la recuperación económica sigue siendo frágil.

En 2022, la República Dominicana tuvo un déficit fiscal del 3.3% del PIB, que se alinea con el promedio de los países de ALC (3.4%), y una ligera disminución desde 2019 (3.5%). Los ingresos del gobierno representaron el 15.3% del PIB de la República Dominicana en 2022, en comparación con el 31.5% en promedio en los países de ALC y el 39.7% en los países de la OCDE. Esta proporción de ingresos en relación con el PIB ha aumentado desde el 14.4% en 2019.

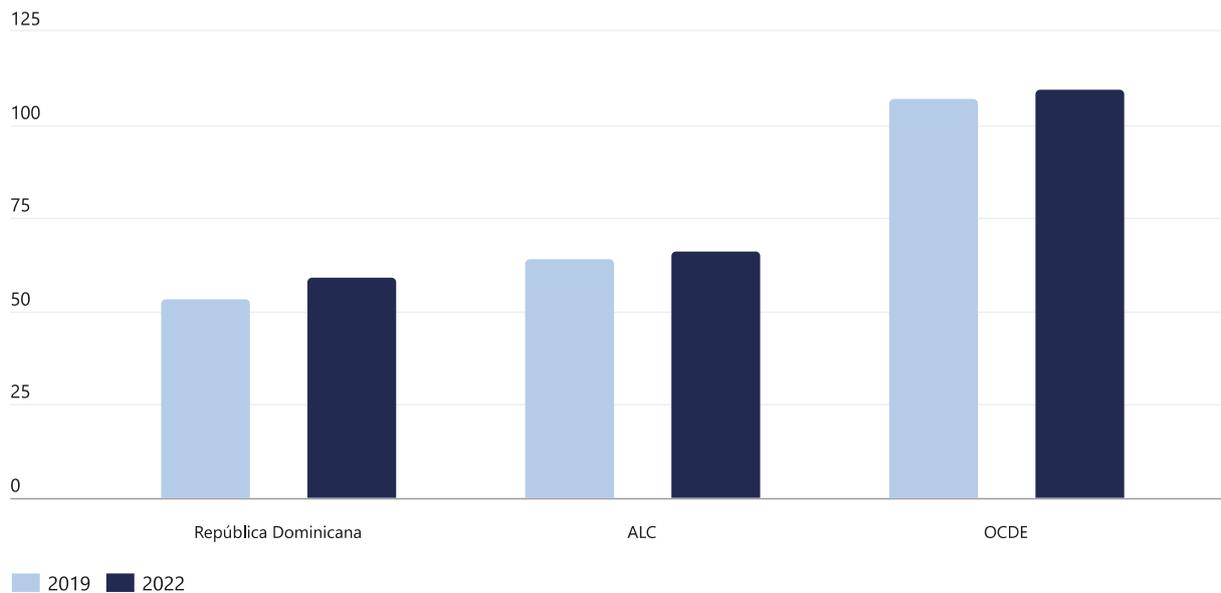
Gráfico 5. Balance fiscal de las administraciones públicas como porcentaje del PIB, 2007 - 2022



La deuda pública puede utilizarse para financiar tanto el gasto corriente como las inversiones, pero tiene un costo en forma de pago de intereses. La deuda como porcentaje del PIB aumentó durante la pandemia de COVID-19 en la región de ALC debido al aumento del gasto y a la pérdida de ingresos fiscales, y en 2022 aún se mantenía 2 p.p. por encima de su nivel de 2019.

En 2022, la deuda pública de la República Dominicana ascendía al 59.6% de su PIB, por debajo del promedio de ALC del 66.3%. Su nivel de deuda ha aumentado desde el 53.6% del PIB en 2019.

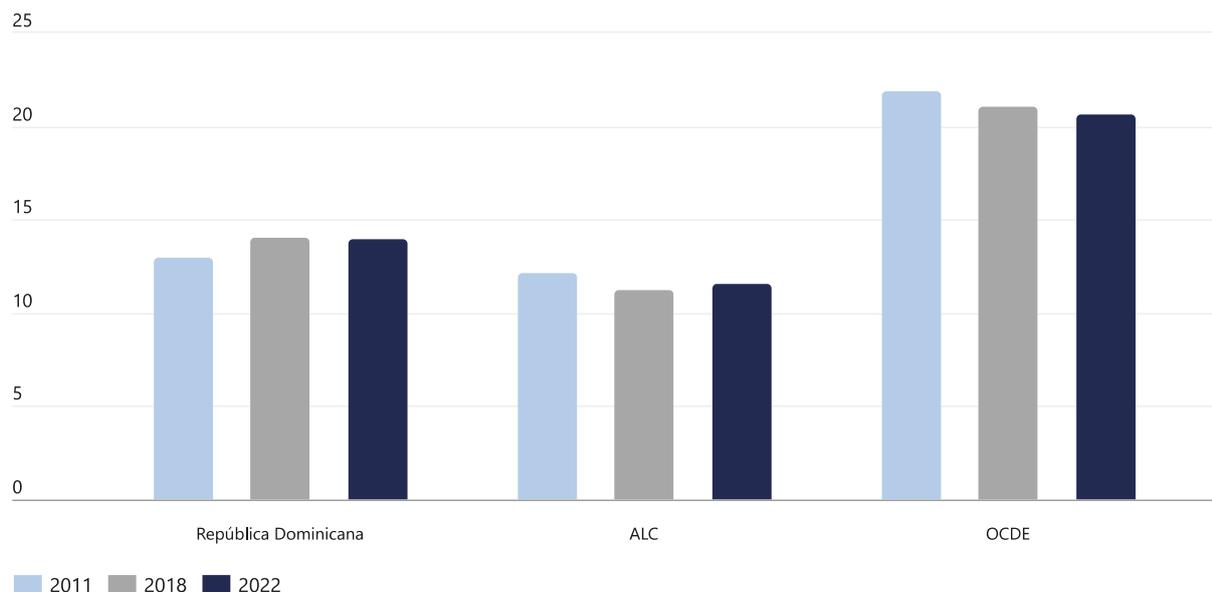
Gráfico 6. Deuda bruta de las administraciones públicas como porcentaje del PIB, 2019 y 2022



Los empleados públicos están al frente del diseño y la formulación de políticas públicas y de la prestación de servicios públicos. La proporción del empleo público varía considerablemente en la región de ALC, desde menos del 5% del empleo total hasta más del 20%.

En 2022, el empleo público en la República Dominicana era el 14% del empleo total, por encima del promedio de ALC del 12%, y por debajo del promedio de la OCDE del 21%. El empleo público en la República Dominicana se ha mantenido estable entre 2018 y 2022.

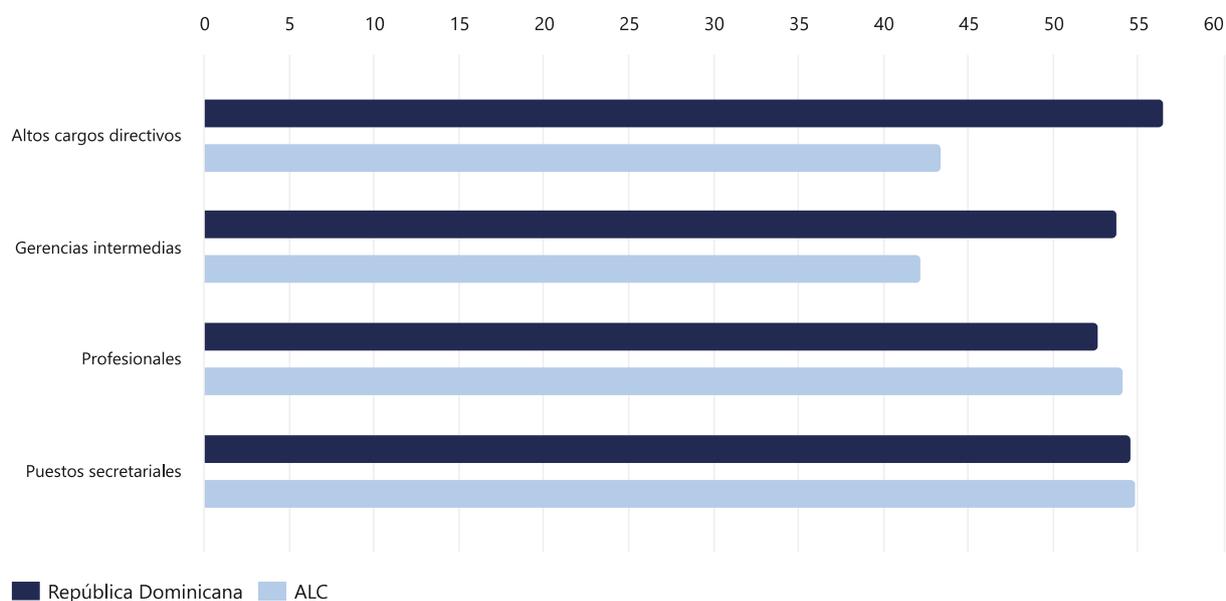
Gráfico 7. Empleo del sector público como porcentaje del empleo total, 2011, 2018 y 2022



La representación igualitaria de mujeres y hombres en el sector público es un punto de referencia para medir el progreso hacia la igualdad de género, la diversidad y una mejor representación. En 2021, más de la mitad de los empleados del sector público en los países de ALC eran mujeres (51.5%), con amplias diferencias entre países. Sin embargo, las mujeres suelen estar infrarrepresentadas en los puestos directivos de la región; en promedio, en 2022, las mujeres ocupaban el 43% de los puestos de alta dirección, con diferencias importantes entre países.

The share of women in senior and middle management roles in the public sector in the Dominican Republic is above the LAC average. Women account for 53.7% of public employment in the Dominican Republic and hold 56.5% of senior management positions, higher than the LAC average of 43.4%. At middle management level, women hold 53.8% of posts, also well above the LAC average of 42.3%.

La proporción de mujeres en puestos directivos y mandos intermedios en el sector público de la República Dominicana es superior a la media de ALC. Las mujeres representan el 53.7% del empleo público en la República Dominicana y ocupan el 5.5% de los puestos de alta dirección, por encima de la media de ALC del 43.4%. En los mandos intermedios, las mujeres ocupan el 53.8% de los puestos, también muy por encima de la media de ALC del 42.3%.

Gráfico 8. Porcentaje de mujeres por puesto en la administración pública central/federal, 2022

Notas para los gráficos

Los datos sobre finanzas públicas y economía proceden de la base de datos de Perspectivas de la Economía Mundial (WEO) del FMI (octubre de 2023), que se basa en el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas (MEFP) y se extrajeron el 3 de noviembre de 2023. Para los promedios de la OCDE, los datos se basaron en el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) y se extrajeron de la base de datos en línea Panorama de las Administraciones Públicas, que representa la última actualización disponible: 5 de enero de 2024.

El balance fiscal, también denominado capacidad (+) o necesidad (-) de financiación de las Administraciones Públicas, se calcula como el total de ingresos públicos menos el total de gastos públicos.

Los datos sobre empleo público proceden de la base de datos ILOSTAT de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se extrajeron el 17 de febrero de 2023. Los datos se basan en la Encuesta de Población Activa. El empleo en el sector público abarca el empleo en el sector gubernamental más el empleo en empresas y sociedades residentes de propiedad pública.

Los promedios de ALC y la OCDE se refieren al promedio no ponderado, con la excepción de los indicadores de finanzas públicas.

Para más información, véase www.oecd.org/publication/government-at-a-glance-lac/2024/